



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-013-2019-00154-01
Demandante:	León Darío Herrera Vélez
Demandado:	Mónica Quinchía Lalinde, Luis Eduardo Sarmiento Rivera y Creaciones LES S.A.S.
Asunto:	Apelación sentencia
Procedencia:	Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Declaratoria contrato laboral, sanción moratoria

Medellín, julio veintidós (22) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Eduardo Sarmiento Rivera y Creaciones Les S.A.S., respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el 24 de marzo de 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por el señor LEÓN DARÍO HERRERA VÉLEZ en contra de MÓNICA QUINCHÍA LALINDE, LUIS EDUARDO SARMIENTO RIVERA Y CREACIONES LES S.A.S., Radicado 05001-31-05-013-2019-00154-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor LEÓN DARÍO HERRERA VÉLEZ convocó a juicio a MÓNICA QUINCHÍA LALINDE, LUIS EDUARDO SARMIENTO RIVERA Y CREACIONES LES S.A.S., pretendiendo se declare la existencia de un contrato de trabajo con los señores Mónica Quinchía Lalinde y Luis Eduardo Sarmiento Rivera entre el 9 de junio del 2009 y el 30 de julio del 2017 y con la sociedad Creaciones Les S.A.S. del 31 de julio del 2017 al 31 de diciembre del 2018; se declare la responsabilidad solidaria entre los accionados, en virtud de la sustitución patronal; se condene a la parte pasiva de la Litis a reconocer cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios, desde el 1º de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2018; vacaciones desde el 9 de junio del 2009; horas extras diurnas desde el 2009; auxilio de transporte desde el 9 de junio del 2009; indemnización por despido injusto; sanción moratoria; sanción por no pago de los intereses a las cesantías y aportes faltantes al fondo de pensiones por el periodo comprendido entre el 9 de junio del 2009 al 31 de diciembre del 2018.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso, en síntesis, que el actor trabajó inicialmente al servicio de la señora Mónica Quinchía Lalinde y de su esposo Luis Eduardo Sarmiento Rivera, luego, el 15 de julio del 2017, los referidos señores crearon la sociedad Creaciones Les S.A.S., representada por los mismos, como principal y suplente, la que fue registrada en la Cámara de Comercio el 31 de julio del 2017, fecha a partir de la cual operó la sustitución patronal, presentándose continuidad en los servicios prestados por el trabajador.

Dio cuenta que el demandante laboró desde el 9 de junio del 2009 y hasta el 31 de diciembre del 2018, en forma ininterrumpida, desempeñándose como despachador, mensajero y encargándose de abrir las instalaciones de la

empresa en la mañana, lo que se dio por dos años y medio, luego su cargo fue de suelero, encargándose de pintar suelas y tacones de los zapatos, ensamblando éstos, lo que ejecutó hasta la fecha en la que finalizó la relación alegada.

Adujo que el horario era de 7:30 a.m a 6:00 p.m, con 30 minutos para el almuerzo, de lunes a sábado, que el salario era el mínimo legal, agregando que el empleador liquidó prestaciones por los años 2009, 2010 y 2011, sin reconocer vacaciones por dichos periodos, adeudando prestaciones sociales, vacaciones y demás derechos causados entre el 9 de junio del 2009 y hasta el 31 de diciembre del 2018, además no se reconoció el auxilio de transporte, dando con ello lugar al pago de la indemnización por falta de pago.

Afirmó que el actor laboró de lunes a sábado, dos horas extras adicionales, es decir, 12 horas extras semanales, las que fueron autorizadas por el empleador.

Finaliza aseverando que los señores Mónica Quinchía Lalinde y Luis Eduardo Sarmiento Rivera, realizaron aportes en pensiones en favor del actor, desde el 9 de junio del 2009 al 27 de diciembre del 2012, como trabajador independiente, lo que genera inconsistencias en su historia laboral; además no se efectuaron aportes desde el 1° de enero del 2013 al 30 de enero del 2016, evidenciando además que el 10 de marzo del 2016, se canceló el mes de febrero de la misma anualidad y a partir de agosto de ese año fue afiliado por Creaciones Les S.A.S. hasta noviembre del 2018.

1.2.- CONTESTACIÓN

Los demandados dieron respuesta a la demanda, aseverando que el demandante trabajó al servicio del señor Luis Eduardo Sarmiento Rivera, aclarando que respecto de la señora Mónica Quinchía Lalinde, jamás existió una relación laboral. Aducen que entre las partes se dieron tres contratos de trabajo a término fijo inferiores a un año, del 10 de febrero al 20 de mayo del

2010, del 1° de febrero al 21 de mayo del 2011 y del 1° de febrero al 26 de mayo del 2012, no siendo cierto que el hoy reclamante laborara en los periodos que describe en la demanda.

Aclaró que el cargo del actor era el de suelero, que no siempre realizó su labor de forma personal, por cuanto en diversas ocasiones quien cumplía con éstas era su sobrino Edwin Alonso Herrera Álvarez, quien en la actualidad labora en la empresa Creaciones Les S.A.S., así como sus hijos Roger y Maicol Herrera y su primo Jorge Vélez, a los cuales se les remuneraba su labor por parte del actor, es decir, el actor no cumplía con sus labores de forma personal, gozando de autonomía para realizar sus funciones, sin estar sometido a un horario por lo que no se puede hablar de horas extras, al no existir un contrato laboral sino un contrato de prestación de servicios.

A su vez, propuso la excepción de inexistencia de las obligaciones demandadas.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 24 de marzo de 2022, el Juzgado de conocimiento declaró la existencia de un contrato laboral a término indefinido entre el actor y Luis Eduardo Sarmiento Rivera, del 9 de junio de 2009 y el 31 de julio de 2017, con sustitución patronal con Creaciones Les S.A.S., desde esta fecha y hasta el 31 de diciembre de 2018; condenó solidariamente al señor Luis Eduardo Sarmiento Rivera y a Creaciones Les S.A.S., a pagar al actor auxilio de transporte y reajustes por \$4.735.386, reajustes de los derechos del 2012 por cesantías por \$66.975, reajuste intereses cesantías \$15.225, reajuste primas de servicios \$100.862, reajuste de vacaciones \$29.909, cesantías \$2.769.575, intereses a las cesantías \$318.871, primas legales de servicios \$3.161.664 y vacaciones \$1.350.243; condenó a Creaciones Les S.A.S., a pagar al demandante por auxilio de transporte \$1.474.232, cesantías \$1.518.959, intereses a las cesantías \$182.275, primas legales de servicios \$1.150.100,

vacaciones \$759.480, indemnización por despido injusto \$5.238.488, indemnización por falta de pago de intereses a las cesantías \$1.002.291, indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, a razón de \$26.041 diarios, causados desde el 31 de diciembre de 2018 hasta la fecha del pago; condenó solidariamente al señor Luis Eduardo Sarmiento Rivera y a Creaciones Les S.A.S. a pagar al actor, ante la administradora de pensiones donde se encuentre afiliado, el cálculo actuarial entre el 1° de enero del 2013 y el 31 de enero del 2016, tomando como IBC el salario mínimo legal; condenó a Creaciones Les S.A.S. a pagar en favor del demandante ante la administradora de pensiones, el cálculo actuarial entre el 1° y el 31 de diciembre del 2018, tomando como IBC el salario mínimo; condenó a Luis Eduardo Sarmiento Rivera y a Creaciones Les S.A.S. a radicar dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, ante la administradora de pensiones del actor, solicitud de liquidación de cálculos actuariales, debiendo proceder con su pago dentro del término que la entidad fije; absolvió a Mónica María Quinchia Lalinde de todas las pretensiones, condenando en costas a Luis Eduardo Sarmiento Rivera y Creaciones Les S.A.S.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Demandados Luis Eduardo Sarmiento Rivera y Creaciones Les S.A.S.

La apoderada de los demandados presentó recurso de apelación, aseverando que no está de acuerdo con lo planteado por el Despacho, sobre la inexistencia de la buena fe de Luis Eduardo Sarmiento Rivera y Creaciones Les S.A.S., toda vez que el señor Luis Eduardo siempre actuó bajo el convencimiento que el contrato que tenía con el actor era de prestación de servicios, no debiendo ser condenado al pago de la indemnización moratoria.

En cuanto al contrato de prestación de servicios, afirmó que el demandante en la audiencia realizó declaraciones en las que reconoció que, durante la relación laboral, en algunas ocasiones tenía empleados a su cargo que prestaban el

servicio en la empresa, lo que explica ocurría porque en la empresa es donde estaban los equipos que se necesitaban para realizar la labor, no porque ese fuera el lugar del servicio. Considera, además que el testigo presentado por el accionante, no tenía conocimiento a fondo de la relación contractual y marcó diferencia en los horarios en los que aparentemente ingresaba el actor al lugar en el que prestaba el servicio.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, ninguno de los apoderados efectuó pronunciamiento.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que entre el actor y el señor Luis Eduardo Sarmiento Rivera se suscribió un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, el que inició el 1º de febrero del 2010 al 20 de mayo del 2010, para desempeñar el cargo de suelero - ver documento *01 Expediente.pdf folios 148 a 149* del plenario, respecto al cual se

efectuó liquidación de prestaciones del 1° de febrero al 23 de diciembre del 2010 -ver documento *01 Expediente.pdf folio 150* del plenario-.

- Que entre el actor y el señor Luis Eduardo Sarmiento Rivera se suscribió un segundo contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, el que inició el 1° de febrero al 21 de mayo del 2011, para desempeñar el cargo de suelero -ver documento *01 Expediente.pdf folios 152 a 153* del plenario-, del cual fueron liquidadas las prestaciones del 1° de febrero al 17 de diciembre del 2011 -ver documento *01 Expediente.pdf folio 196* del plenario-.

- Que entre el actor y el señor Luis Eduardo Sarmiento Rivera se suscribió un tercer contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, el que inició el 1° de febrero del 2012 al 26 de mayo del 2012, para desempeñar el cargo de suelero -ver documento *01 Expediente.pdf folios 134 a 135* del plenario-, liquidando las prestaciones del contrato del 1° de febrero al 22 de diciembre del 2012 -ver documento *01 Expediente.pdf folio 146* del plenario-.

- Que la sociedad Creaciones Les S.A.S., efectuó su registro mercantil el 31 de julio del 2017, figurando como representante legal Luis Eduardo Sarmiento Rivera y como representante legal suplente Mónica Quinchía Lalinde -ver documento *01 Expediente.pdf folios 17 a 21* del plenario-.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si el vínculo contractual que unió a las partes corresponde a un contrato de trabajo, bajo la óptica del principio de primacía de la realidad, o si por el contrario, se trató de un contrato de prestación de servicios, como lo alega la parte pasiva de la litis?

¿Si es procedente revocar la condena impuesta a la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, con fundamento en la buena fe en el accionar que aducen los demandados?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual i) la relación que unió a las partes tiene carácter laboral, regida por tres contratos de trabajo a término fijo, último que se prorrogó hasta el 30 de julio de 2017, sin que se acredite la existencia de un contrato civil de prestación de servicios, en tanto no fue desvirtuada la presunción de subordinación que amparaba al demandante, ii) no se acredita una causa razonable, que justifique el no pago de las prestaciones sociales del demandante; en consecuencia, la sentencia debe ser CONFIRMADA, como se explica:

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El concepto de contrato realidad tiene fundamento en el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas que eligen las partes en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, de donde se concluye que con independencia de la denominación del contrato, lo que determina el surgimiento de los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, lo es la confluencia de los tres elementos que definen el contrato de trabajo, establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo.

Conforme a la citada norma, son tres los elementos que permiten la configuración de un contrato de trabajo, el primero, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; el segundo, la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, lo cual debe

mantenerse por todo el tiempo o duración del contrato y el tercer elemento, el salario como retribución del servicio.

El artículo 24 ibídem, modificado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1990, como manifestación del carácter tuitivo del derecho laboral, consagra una presunción legal del elemento subordinación, una vez acreditada la prestación personal del servicio:

“ARTICULO 24. PRESUNCIÓN. Modificado por el art. 2, Ley 50 de 1990. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.”

En desarrollo de tal presunción, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha estructurado una línea jurisprudencial pacífica y uniforme, en torno a cómo se distribuyen las responsabilidades probatorias entre el empleador y el trabajador, criterio expuesto entre otras, en las sentencias SL39259 del 17 de abril de 2013 y SL4027 del 08 de marzo de 2017 (45344).

“Lo anterior significa, que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es a la empleadora a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado el operario.”

Ahora bien, el trabajo humano, en todas sus formas, goza de la especial protección del Estado (artículo 25 de la Constitución Política), pero los principios que gobiernan el derecho sustantivo laboral, no son aplicables a aquellos trabajos que están por fuera del escenario de subordinación, como ocurre frente a contratos de carácter civil o comercial.

2.6.- CASO CONCRETO

En el caso sometido al estudio de la Sala, no hay duda que hubo una prestación personal de servicios por parte del señor León Darío Herrera Vélez

al señor Luis Eduardo Sarmiento Rivera y a la sociedad Creaciones Les S.A.S., como también es palmario que la misma estuvo regida por tres contratos de trabajo a término fijo inferior a un año, celebrados, el 1° de febrero del 2010 prorrogado al 23 de diciembre de 2010; el 1° de febrero de 2011 prorrogado al 17 de diciembre de 2011 y 1° de febrero del 2012, prorrogado al 22 de diciembre de 2012.

Se acreditó, igualmente, con la documental obrante a folios 146, 150 y 196, que respecto a los citados contratos se efectuó la respectiva liquidación de prestaciones sociales. De similar forma en la réplica al libelo incoativo la pasiva, admite la suscripción de los contratos y la prestación del servicio interrumpida, aduciendo como tesis de defensa que, con posterioridad a la liquidación del último contrato, 22 de diciembre de 2012, la misma se dio en el marco de un contrato civil de prestación de servicios, carente de subordinación.

No obstante, para la Sala jurídicamente debe concluirse que la prestación del servicio a partir del 23 de diciembre de 2012, se da en vigencia de las prórrogas sucesivas del último contrato, toda vez que no se cumplió con el aviso de no prórroga, o por lo menos, no se probó en el proceso.

Es de advertir que la sola “prestación personal del servicio” hace surgir la presunción del contrato de trabajo de conformidad con el referido artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, y traslada la carga de la prueba de la inexistencia de la subordinación al empleador, correspondiéndole demostrar que se trató de un servicio autónomo e independiente.

Debe relevarse, que la parte accionante, presentó una sola testigo, señora Marta Oliva Villa Guerra, quien afirmó que fue compañera de trabajo del actor hace tres o cuatro años, que fue el propio demandante quien la llevó a trabajar allá, que laboró solo en las temporadas, lo cual hizo durante tres o cuatro años, explicando que la llamaban para laborar en septiembre hasta diciembre

o enero, presenciando durante dichos periodos que el actor recibía órdenes y cumplía un horario, desconociendo los demás aspectos del vínculo que unió a las partes.

Si bien es cierto que la testigo no acredita un completo conocimiento sobre la forma en que se ejecutó el contrato, también lo es que le corresponde al empleador desvirtuar la existencia de la subordinación que presume el citado artículo 24 ibidem, observando que la parte accionada no logra cumplir su responsabilidad probatoria, en tanto no presentó testigos, aunado al hecho que el señor Luis Eduardo Rivera, no se conectó a la audiencia de conciliación, ni a la de trámite y juzgamiento, en la cual debía rendir su interrogatorio, no justificó su inasistencia, haciéndose acreedor a la consecuencia procesal de declaratoria de confeso, teniendo la a quo como ciertos los siguientes hechos susceptibles de confesión:

Hecho primero: Relación laboral con el señor Luis Eduardo Rivera;

Hecho tercero: Vinculación mediante contrato verbal

Hecho cuarto: Extremos de la relación del 9 de junio del 2009 hasta el 30 de julio del 2017.

Hecho quinto: Oficio del demandante despachador, mensajero y suelador;

Hecho sexto: Horario;

Hecho séptimo: Salario mínimo devengado;

Hecho noveno: Liquidación de prestaciones sociales proporcional por los años 2009, 2010 y 2011 sin reconocer vacaciones;

Hecho Décimo: El señor Luis Eduardo adeuda prestaciones y demás derechos adquiridos durante la relación;

Hecho once: El actor laboró horas extras;

Hecho Doce: No pagó de auxilio de transporte;

Hecho catorce: Pago de aportes del actor a la seguridad social como trabajador independiente y no pago de los ciclos completos.

De tal manera que la carga probatoria de los accionados iba más allá de afirmar que las partes convinieron celebrar un contrato de prestación de servicios, porque por mandato constitucional y legal, la voluntad de los contratantes no puede desconocer los derechos y principios mínimos del trabajo subordinado que son objeto de protección constitucional y legal.

Cabe recordar, como lo precisó la a quo, que el contrato de prestación de servicios, supone la contratación externa de un trabajador independiente para la ejecución de labores que requieren normalmente de especiales conocimientos técnicos o científicos, que pueden ejecutarse con plena autonomía del contratista, sin estar sujeto a horarios, órdenes ni reglamentos, condiciones que no se aplican en el caso sub examine.

De manera que cuando se acepta que el actor se desempeñó primero como despachador y luego como suelero, encargándose de hacer las suelas y tacones de los zapatos, se revela que no estamos frente a un verdadero contratista independiente.

Finalmente, respecto al argumento de la recurrente en torno a la delegación en la prestación del servicio, debe señalarse que aun cuando el actor admite que llevaba personas para que le ayudaran en sus funciones, remunerándoles él mismo ese trabajo, ello no desdibuja el vínculo laboral, ante la acreditación de la continuidad de la función o la actividad que fue contratada, inicialmente, a través de un contrato de trabajo, que se itera, a juicio de la Sala se mantuvo vigente al no ser preavisada su no prorroga.

En todo caso, aun si se admitirá que el contrato suscrito el 01 de febrero de 2012 terminó y nace una nueva relación contractual, es claro que la misma siguió siendo laboral, porque el trabajador carecía de autonomía técnica, tenía una remuneración periódica mensual, en cuantía de un salario mínimo legal que le impedía subcontratar y adicionalmente cumplía la misma labor que

antes fue subordinada y contratada de acuerdo con las normas del Código Sustantivo de Trabajo.

Sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo

El no pago de los salarios y prestaciones sociales, fue calificado por el legislador, de tiempo atrás, como una conducta merecedora de sanción. Es así como el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2001, dispone:

“Artículo 65. Indemnización por falta de pago:

1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.

Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero”.

En este tema, ha sido la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la que ha precisado que la sanción por el retardo en el pago de salarios y prestaciones sociales del trabajador no es de aplicación automática, al respecto, en sentencia SL1451 del 25 de abril de 2018, recordó *“La Corte en desarrollo de su función de interpretar las normas del trabajo y crear jurisprudencia, ha sostenido que la sanción moratoria no es automática. Para su aplicación el juez debe constatar si el demandado suministró elementos de persuasión que acrediten una conducta provista de buena fe (SL8216-2016).”*

En esta perspectiva lo que debe probarse en el proceso es la buena fe que exonere de la sanción y no la mala fe, por ende, quien tiene la carga probatoria de probar el hecho, es, sin duda, el empleador, así lo precisó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde la sentencia Radicación 32529 de 2009, así:

“De suerte que la indemnización moratoria procede cuando, después del examen del material probatorio, el dispensador de justicia concluye que el empleador no estuvo asistido de buena fe. Se equivoca por tanto el recurrente cuando, al inicio del cargo, afirma que la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que la indemnización moratoria “... requiere que quien la aduce demuestre una conducta torticera de empleador para perjudicar al trabajador”, porque, como ha quedado visto, por el contrario, quien debe demostrar que su conducta estuvo revestida de buena fe es el empleador; mientras que al trabajador le basta probar la omisión o el retardo en el pago de los derechos laborales que da lugar a la sanción”.

Lo anterior resulta razonable, además, teniendo en cuenta que las circunstancias constitutivas de buena fe, como lo son aquellas causas plausibles, entendibles, justificadas para no haber procedido al pago o haber realizado un pago deficitario, competen exclusivamente al empleador.

En el sublite, se encuentra que la condena a la indemnización moratoria, recae en cabeza de la sociedad Creaciones Les S.A.S., sin que se acreditara una causa razonable, lógica, entendible que explique justificadamente el no pago de las prestaciones sociales del demandante generadas en vigencia de la relación laboral, por lo que no resultan suficientes las meras afirmaciones que hubiera realizado la parte interesada, a efectos de exonerarse del reconocimiento de esta sanción.

Por todas estas razones, la providencia de primera instancia se CONFIRMARÁ en todas sus partes.

Costas en esta instancia a cargo de los demandados LUIS EDUARDO SARMIENTO RIVERA Y CREACIONES LES S.A.S., se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.000.000, a cargo de cada uno de ellos.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **CONFIRMA** la Sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el 24 de marzo del 2022, en el proceso ordinario instaurado por el señor LEÓN DARÍO HERRERA VÉLEZ en contra de MÓNICA QUINCHÍA LALINDE, LUIS EDUARDO SARMIENTO RIVERA Y CREACIONES LES S.A.S.

2.- Costas en esta instancia a cargo de los demandados LUIS EDUARDO SARMIENTO RIVERA Y CREACIONES LES S.A.S., se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.000.000 a cargo de cada uno de ellos.


3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE



JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO